



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0497/2017

FECHA: 28 de diciembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0497/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente reclamación pueden sistematizarse como sigue:

- Mediante escrito de 15 de noviembre de 2017 remitido a la Directora del Centro Educativo Escuelas Pías de Albacete, el hoy reclamante, tras poner de manifiesto que en fechas anteriores había solicitado una relación de todos los informes efectuados por la orientadora del colegio en lo referente a la negación de un diagnóstico clínico de sus hijos, planteó la siguiente solicitud de información: «[q]ue se nos facilite la titulación profesional de la orientadora del colegio y firmante de las pruebas, informes y dictámenes emitidos que ya se nos han facilitado copia. Esta información nos la pueden remitir directamente por la plataforma digital del colegio».

- A través de un correo electrónico de la Directora del indicado Centro educativo de 16 de noviembre se traslada al interesado que «previa consulta con el Servicio de Inspección [...] no me está permitido facilitar la

ctbg@consejodetransparencia.es



documentación que solicitan, ya que no me corresponde a mí divulgar los datos personales de los docentes del centro. Es la administración educativa la que se encarga de recoger la titulación del personal y validarla para ejercer las funciones correspondientes».

- El siguiente 22 de noviembre de 2017 el interesado reitera su solicitud, especificando que, en su opinión, la contestación trasladada «incurre en cierta confusión, ya que los datos de capacitación de una persona son los que le avalan para su desempeño profesional y por lo tanto deben estar a disposición de aquellos a los que presta su actuación. Examinada la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal comprobamos que esta se refiere a información sensible sobre la ideología, religión o creencias, lo que nada tiene que ver con lo que por nuestra parte es demandado».

- A través de un escrito registrado en esta Institución el 22 de diciembre de 2017, el interesado plantea una reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-.

2. El 26 de diciembre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente a la Oficina de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conocimiento.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:



“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el precitado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en la determinación subjetiva del ámbito de aplicación de la LTAIBG. En efecto, los Colegios Públicos se considera que están incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG, motivo por el que el ejercicio del derecho de acceso a la información se realizará en estos supuestos a través de la vía del procedimiento regulado en los artículos 17 a 22 de la reiterada LTAIBG.

En el caso que ahora nos ocupa, el Colegio de referencia, según se desprende de la información disponible en su página web, se trata de un colegio privado concertado que pertenece a la provincia escolapia de Betania - Escolapios-. Esto es, se trata de una institución de naturaleza privada.

La aplicación de la LTAIBG a las entidades de naturaleza privada aparece prevista, en términos específicos, en el artículo 3 de la citada Ley. A estos efectos, por lo que respecta al ejercicio del derecho de acceso a la información, las previsiones contempladas en los artículos 12 a 24 de la LTAIBG en materia de procedimiento administrativo de acceso y sus garantías no resultan de aplicación a las entidades de naturaleza privada por expreso mandato y decisión del legislador. Luego, en consecuencia, no cabe plantear una solicitud de acceso a la información al amparo de la LTAIBG frente a un Colegio Privado, sujeto al que no le resulta de aplicación esa específica parte de la Ley.



De acuerdo con ello, procede inadmitir la reclamación planteada en tanto y cuanto las entidades privadas no están obligadas a tramitar solicitudes de acceso a la información.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR A TRÁMITE** la Reclamación presentada por cuanto el sujeto al que se remite la solicitud de acceso a la información queda fuera del ámbito de aplicación de los artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

